

D.R. © 2021 Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C. P. 04510, México, Ciudad de México.

Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe
Piso 8 Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, C.P. 04510,
Ciudad de México. <https://cialc.unam.mx/>
Correo electrónico: betan@unam.mx

Con la licencia:



Usted es libre de:

- ✓ Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Bajo los siguientes términos:

- ✓ **Atribución:** usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.

- ✓ **No comercial:** usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.

- ✓ **Sin derivados:** si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal de la licencia completa disponible en:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>

En los casos que sea usada la presente obra, deben respetarse los términos especificados en esta licencia.

IDENTIDADES, UTOPIÁS Y FANTASMAS ARMADOS EN LAS AMÉRICAS

Por Ricardo MELGAR BAO
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA
E HISTORIA, MÉXICO

*A Darcy Ribeiro y sus muchas utopías,
por nuestras.*

DISCUTIR AMÉRICA LATINA sigue siendo una tarea ineludible, sobre todo en estos tiempos de fin de milenio en que pareciera que nuestro espacio continental y sus muchas identidades y máscaras viven los prolegómenos de una gran conmoción cultural, social, política, económica y tecnológica, cuyas coordenadas nos remiten a los grandes polos del reordenamiento mundial y a los modos nacionales en que se expresa el proceso de globalización.

No obstante esta nueva y más intensa fase de occidentalización, que Ribeiro prefiere denominar por una y mil razones de recolonización continental, analizar y reflexionar sobre el papel de las fuerzas armadas resulta ineludible. En este contexto queremos retomar algunas ideas aportadas por Darcy Ribeiro, ese antropólogo-águila que nos enseñó a visitar y mirar las Américas en el mundo cambiante de nuestros días, sin renunciar a su inocultable y conflictuada diversidad etnocultural. Ribeiro en su etnografía del poder y la violencia contemporánea encuentra la presencia de tradiciones perversas que retroalimentan los nuevos modos de exclusión y negación en curso. Así por ejemplo, Ribeiro interroga la densidad histórico-cultural que acompaña al papel del policía o militar que toma por asalto las favelas de Río de Janeiro, aproximándose en nuestros imaginarios a los cazadores de esclavos de otros siglos que parecían haberse ido o esfumado. No hay duda que viejas e indeseables permanencias persisten en el escenario cambiante y agitado de Nuestra América (Ribeiro 1993: 188).

A lo largo de esta comunicación intentaremos contextualizar las siguientes preguntas: ¿Es posible diferenciar las tradiciones castrenses y sus proyecciones político-militares en nuestros países a partir de las matrices etnoculturales que les subyacen? ¿Se puede pensar seriamente la democratización de los países de la región al margen del carácter y las tradiciones de sus instituciones militares? ¿En estos tiempos de activa y conflictuada integración e interacción mundial, qué papel subalterno desempeñan o desempeñarán nuestras fuerzas armadas en los frentes internos regionales y nacionales?

Memoria y olvido castrense: la misión civilizadora

BAJO el orden oligárquico los ejércitos forjaron su nueva institucionalidad y definieron el restringido universo de sus nacionalismos frente a los países vecinos, muy rara vez frente a las avanzadas neocoloniales de los Estados Unidos y de las potencias europeas. Pero las burocracias militares en la región cumplieron sobre todo activamente el papel de "gestores directos de la estructura de poder" en acuerdo o en disenso con la burocracia civil y las élites dirigentes (Ribeiro 1982: 3). La paz y orden interiores, así como los esfuerzos por marcar fronteras no siempre bien definidas, devinieron en las tareas legitimadoras de los nacionalismos castrenses. La cartografía latinoamericana, más que la obra de geógrafos académicos, fue hechura de cartógrafos militares. La sacralización militar de las fronteras coadyuvó en el desarrollo de las nuevas configuraciones hacia dentro, que impuso el poder oligárquico. Bajo esta lógica las divisiones político-territoriales se afirmaron a contracorriente de la voluntad de los actores etnoculturales locales y regionales. No hubo frontera nacional que no fracturase hasta el presente los modos de vida de sus poblaciones étnicas transfronterizas. Los yanomami, mapuches, aymaras, quechuas, guajiros y mayas, entre otros, pueden todavía atestiguarlo.

La función cumplida por los ejércitos varió según su peculiar inserción en las estructuras de poder de las macroetnias americanas: Pueblos Testimonio, Pueblos Nuevos y Pueblos Trasplantados, como Ribeiro propone llamarlas. Aunque en líneas generales los ejércitos en los tres casos fueron marcados por afines prácticas etnocidas y genocidas, sus víctimas, si no fueron virtualmente exterminadas, quedaron ubicadas en posiciones y grados diversos de subalternidad social, opresión cultural y dominación política. Ciertamente el interesado romanticismo liberal sigue empeñado en ver a lo largo

del siglo XIX su maquillado discurso jurídico-ideológico, que convirtió a los indígenas en ciudadanos y les dio una nueva filiación nacional. La historia real del otro discurso liberal frente a los indios, así como las campañas desempeñadas por sus ejércitos en los territorios étnicos, exhiben sin vergüenza sus indofobias y sus xenofobias, también sus muchos genocidios. Con motivo de los debates del V Centenario más de un historiador español hizo notar que nuestras repúblicas liberales exhibieron prácticas antiindígenas tan drásticas y crueles que pesan tanto como los horrores y excesos del siglo XVI durante el proceso de Conquista. Las exitosas Campaña del Arauco, Campaña del Desierto, las muchas campañas de colonización amazónica y de recolonización andina, fueron cumplidas por nuestros gloriosos ejércitos y justificadas por nuestros más preclaros pensadores y reformadores liberales, pero también por lo más granado de nuestros historiadores (Viñas 1982). Frente a las inmigraciones europeas, los liberales en los Pueblos Trasplantados utilizaron a discreción ciertas calculadas xenofobias, mientras que en los Pueblos Nuevos y Pueblos Testimonio acicatearon los sueños de las élites de blanquearse y reoccidentalizarse, primero ellos y por extensión sus respectivas sociedades.

Los Pueblos Testimonio abarcan a “las poblaciones mexicanas, mesoamericanas y andinas, por ser las sobrevivientes de las altas y antiguas civilizaciones que ante el impacto de la expansión europea se derrumbaron, entrando en un proceso secular de aculturación y de reconstrucción étnica que todavía no se ha clausurado” (Ribeiro 1977: 115). Resulta ilustrativo al respecto la manera como en 1933 un oficial peruano, apoyándose en el modelo del ejército colonial francés para Argelia diseñado por Herbert Lyautey, justificó la misión civilizadora del ejército peruano frente a la población indígena (Morla Concha 1993; Rospigliosi 1994: 36-37). Años más tarde, la Junta Militar de Gobierno que inauguró el general Juan Velasco Alvarado reformuló la postura de las fuerzas armadas frente a la cuestión indígena. Por decreto los indígenas son convertidos en campesinos y adscritos a una controvertida Reforma Agraria que les ofertan las denominadas Sociedades Agrícolas de Interés Social, entidades mediadoras del viejo antagonismo entre comunidades andinas y haciendas, las cuales a la larga exacerbaron los conflictos etnoclasistas. Sin embargo, otro decreto promulgado por Velasco Alvarado atenuó el tenor etnocida de su política agraria al oficializar dos idiomas nativos (el quechua y el aymara) al lado del castellano, postura revertida por la actual constitución política y

respaldada por las fuerzas armadas. El curso de la guerra interna, a raíz de la expansión senderista y tupacamarista en las regiones andinas y amazónicas, reactualizó y remozó las viejas tradiciones sobre el modelo del ejército colonial, evidenciando en los modos y costos de sus campañas contrainsurgentes las lacras del etnocidio y genocidio antiindígenas.

Los Pueblos Nuevos incluyen a las poblaciones emergidas de una compleja gama de mestizajes biológicos y de procesos de aculturación de etnias muy dispares, que potenciaron principalmente las haciendas y plantaciones bajo modalidades mercantiles arcaicas y fuertemente opresivas. Pueblos Nuevos son

los brasileños, los venezolanos, los colombianos, los antillanos y una parte de la población de América Central y del sur de los Estados Unidos... Una segunda categoría de Pueblos Nuevos, pronunciadamente diferenciada de la primera por su formación étnica nacional básicamente indígena tribal, y por no haber experimentado las compulsiones de la *plantation*, se encuentra en Chile y en el Paraguay. Fueron pueblos Nuevos del mismo tipo de estos últimos el Uruguay y la Argentina, aunque más tarde étnicamente desfigurados por un proceso de sucesión ecológica que los europeizó masivamente (Ribeiro 1977: 225-226).

La percepción militar chilena durante los años de la dictadura pinochetista ha arrojado interesantes y reveladores testimonios de ex oficiales sobre la cuestión indígena, eslabonando sus claves internas y externas bajo la lógica de la doctrina de la seguridad nacional. El oficial González relata: "¿Te acuerdas que te conté cómo una vez detectaron, así dijeron, que se preparaba una insurrección de mapuches en el sur? Y ahí nos metieron una charla anti-indígena; que los mapuches no tenían cultura, eran peligrosos, había que tenerlos encerrados... Y que los indios eran peligrosos porque eran animales no desarrollados". Recuerda este oficial la mirada castrense de este pueblo nuevo de cara a los vecinos pueblos testimonio: "Hablaban de los bolivianos como inferiores, decían que eran indios sublevados manejados por potencias extranjeras... de los peruanos que eran unos indios. Yo no visito jamás un buque peruano, pero los términos que escuché a los oficiales eran siempre despectivos" (Rivas y Reiman 1976: 174 y 189). Pero no se crea que esta mirada es patrimonio exclusivo de ejércitos propios de las sociedades donde las poblaciones indígenas constituyen pequeñas minorías excluidas y negadas. El curso perverso que la doctrina de seguridad nacional asumió en los países de la región donde existen etnias

nativas, independientemente de su matriz etnocultural, reprodujo posturas castrenses similares a las relatadas por el oficial chileno, alcanzando su mayor dramatismo en pueblos testimonio como Bolivia, Perú y Guatemala (Melgar y Olivera 1981: 31-42).

Por último, tenemos a los Pueblos Trasplantados que abarcan a los angloamericanos y a los rioplatenses. Estos pueblos

contrastan con las demás configuraciones socioculturales de América por su perfil característicamente europeo, manifiesto no sólo en el tipo racial predominantemente caucasoide, sino también en el paisaje creado como reproducción del Viejo Mundo, como en la configuración cultural y en el carácter más maduramente capitalista de su economía (Ribeiro 1977: 449).

Bajo la dictadura del general Jorge Rafael Videla los homenajes militares con motivo del centenario de la guerra contra los indios en la Argentina condensaron la indofobia institucional reinante al defender el papel protagónico del ejército en el curso de esas campañas de exterminio. Quizás en esta dirección tenga mayor sentido afirmar, en contexto político argentino, que los indios que fueron victimados en esas campañas militares legítimamente pueden ser recordados como los "desaparecidos de 1879" (Viñas 1982: 12).

En los frentes nacionales internos los ejércitos asumieron una pretendida misión civilizadora a través de la campaña militar anti-indígena, la leva y la cruzada antivagancia. No hay revista ni boletín militar que no registre con orgullo castrense la pretendida labor patriótica de inculcarles a las masas de jóvenes campesinos, pertenecientes a muchas filiaciones étnicas y culturales, los inefables valores de la disciplina férrea y ciega frente a toda voz de orden emanada de la autoridad. También nuestros ejércitos se regocijaron de haber coadyuvado a la expansión y popularización de los idiomas oficiales, de las prácticas sanitarias (el corte de pelo y el baño) y de los nuevos cultos cívico-patrióticos. Las soldadescas asumieron los rostros de una masa de maniobra dispuesta a morir por la "patria" y por el "orden", pero también a ofertarse previo licenciamiento como mano de obra deseable en los nacientes mercados de la modernidad industrial y agropecuaria.

Señas y contraseñas del mercado

LA revolución científico-técnica a la que nos toca asistir viene remodelando las estrategias militares, el perfil y el volumen de las

instituciones castrenses a escala planetaria. La velocidad, la intensidad y el carácter efímero de la presencia militar están asociados a las nuevas tecnologías y a la configuración de inéditos centros de decisión militar supranacionales. La civilización emergente de las nuevas tecnologías tiene la capacidad de aglutinar a diversos grupos nacionales. Pero al mismo tiempo que se avanza en la integración supranacional se revelan las caras ocultas de la diversidad etnocultural que potencia sus demandas frente a los nuevos esquemas de dominación (Ribeiro 1991: 3).

A las Fuerzas Armadas, además de haber sido el soporte generador y reproductor de las dictaduras contrainsurgentes de los años setenta y ochenta de América Latina, les correspondió el dudoso honor de haber introducido los primeros proyectos neoliberales desnacionalizadores, inducidos en su momento por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La adhesión al modelo neoliberal por parte de los militares latinoamericanos terminaría por afectar su propio futuro a pesar suyo. Así viene sucediendo con las oleadas privatizadoras de los noventa que no han dejado al margen a las empresas militares, vinculadas o no a la fabricación de armas, postergando en el mejor de los casos su venta o liquidación.

A inicios de la década, los militares dirigían en Guatemala el Banco Central y otras 40 empresas estatales, y en El Salvador controlaban a su vez 23 empresas estratégicas. En los países más desarrollados del continente las fuerzas armadas intentaban beneficiarse de los espacios que iban ganando en el mercado mundial de armas; Brasil llegó a obtener 3 mil millones de dólares anuales, siguiéndole Argentina con sus aviones y Chile con sus bombas racimo (Vásquez 1991: iii). En la actualidad otro es el panorama, la empresa brasileña Engesa que diseñó un cotizado prototipo de tanque pesado —el Osorio— opera con pérdidas (Hens/Sanahuja 1995: 62). El año pasado la oferta de venta del prototipo de avión argentino Pampa 2000 fue desechada por el Pentágono, frustrando los sueños de autonomía tecnológica de la fuerza aérea de dicho país. La cesión de las instalaciones de los talleres de la industria aérea de Córdoba, que fabricó el Pampa 2000 y que más exitosamente fabricaba el avión antiguerrilla Pucará, al ser concesionado por veinte años a la Lockheed Aircraft Service bajo supervisión del Pentágono, aunque significativa ya no será suficiente para pivotear el milagro militar argentino en la región. Meses después de firmada esta transacción, la Lockheed, al fusionarse con el consorcio militar Martin Marietta, devino en el principal proveedor de armas del Pentágono

al desplazar al otrora hegemónico consorcio McDonnell Douglas. Sin embargo, la geografía económica de los países miembros del Mercosur tienen proyectados sus principales intereses hacia Europa, por lo que se puede suponer que el mercado de armas en dicha zona dista de estar bajo control de las empresas norteamericanas.

La Paz Caliente no puede disociarse del perfil del mercado de armas a escala global y continental. Una fuente confiable, como es el World Policy Institute, con sede en Nueva York, reporta que de los 50 conflictos bélicos librados entre 1993 y 1994, 45 recibieron material de guerra de proveedores norteamericanos. No obstante que estos conflictos de baja intensidad permitieron a los Estados Unidos recuperar en 1993 el primer lugar en el mercado mundial de armas, captando el 70 por ciento de las ventas, cuyo monto asciende a casi quince mil millones de dólares, el complejo industrial-militar norteamericano no ha logrado salir de la crisis en que se sumió al concluir la guerra fría (Washington, *IPS*, 24/5/1995). Un año más tarde, Francia se erigió en el principal proveedor de armas del mercado mundial. La pugna por proveer y hegemonizar el mercado de armas divide a los antiguos socios de la OTAN.

Frente a la región el Pentágono pareciera querer favorecer por un lado cierta maquila de armas convencionales concesionadas a sus principales proveedores bajo condiciones especiales de estabilidad política y seguridad industrial, mientras por el otro reorienta la oferta del diversificado mercado de armas hacia aquellas que principalmente se proyectan para un efectivo control social y en las que las empresas norteamericanas se sienten más fuertes frente a sus competidoras europeas.

El mercado formal de armas latinoamericanas está atravesado por los hilos invisibles que lo unen al mercado informal que anteriormente surtía a las guerrillas y a las mafias, y ahora atiende las demandas de los profesionales de la violencia: guardias blancas, sicarios y terroristas.

Paralelamente al mercado de armas, se viene desarrollando otro exitoso mercado anexo: el de las tecnologías de la seguridad privada, que abarcan desde limusinas blindadas pasando por microrradars hasta un nuevo paquete de armas paralizantes y destructivas. En la ciudad de Washington a fines de abril y nada menos que en el hotel Sheraton tuvo lugar la Exhibición Copex 96, que aglutinó a las firmas empresariales que fabrican y proveen las últimas modas en tecnologías de uso paramilitar. En otras ciudades latinoamericanas se han comenzado a llevar a cabo eventos similares aunque más

restringidos en sus paquetes de oferta. Las asimetrías sociales de las grandes ciudades latinoamericanas condicionan los flujos y usos exitosos de los bienes que oferta este mercado auspiciado por las autoridades neoliberales y tolerado por las fuerzas armadas y policiales. Este consumo tecnológico, asociado a los miedos de las élites y de las capas medias, a su vez obliga a la expansión de empresas privadas que ofertan mano de obra calificada para fines de protección, seguridad y control laboral y residencial de acentuado tenor autoritario y represivo, no por azar a cargo de expertos militares en activo o en retiro. La seguridad de la vida cotidiana en las ciudades y en el campo se viene privatizando y no pasará por los hogares de los pobres y los asentamientos poblacionales marginales. Los decálogos de la seguridad pública, que ofertan por medio de impresos o mensajes televisivos las autoridades competentes de nuestras ciudades latinoamericanas, demuestran en qué medida estamos haciéndonos cómplices de la configuración de reales junglas de concreto y asfalto, retroalimentando viejas y nuevas ideologías de exclusión social, incluidos los racismos, y un sinnúmero de perversas xenofobias y xenofilias.

La propuesta del Pentágono de desmilitarizar selectivamente el continente sólo exhibe precariamente a su favor dos hechos: la extensión formal de las democracias y la disminución sensible de efectivos militares, pero queda desvirtuada al ser confrontada con la dinámica real del mercado de armas y la activación creciente de las fuerzas armadas para reforzar los desgastados mecanismos de control social. Piénsese en la más reciente evolución en México, tan ajeno a las tradiciones armamentísticas de otros lugares del continente, que se ha convertido en la segunda fuerza militar detrás del Brasil y en el mayor cliente del complejo industrial militar norteamericano en el área. Mientras tanto, en la agenda política mexicana se comienza a debatir si las fuerzas armadas deben o no asumir funciones análogas a las que vienen cumpliendo actualmente en Brasil y otros países.

La geopolítica norteamericana parece apostar a mantener las afinadas coordinaciones diplomáticas y castrenses con los países del Caribe a partir de la invasión a Granada, mientras busca generar un espacio desmilitarizado en América Central. Lo ideal para el Pentágono sería que México aceptase cumplir una nueva función que fuera más allá de su reconocida vocación diplomática de mediación en el área, al considerar la potencial función pacificadora de sus fuerzas armadas. Mientras tanto, otra parece ser la lógica mexicana a pesar de las pretensiones estadounidenses y los equívocos entusiasmos de algunos de sus políticos y militares. Es posible

y deseable que en el caso mexicano pesen más las razones propias de su crisis interna y más aún las tradiciones de su política exterior; las posturas exhibidas en la OEA y en la Cumbre Iberoamericana así parecen refrendarlo.

No cabe duda que la lógica perversa de la economía de guerra marcha a contracorriente de la lógica de la paz mundial y regional. El escándalo suscitado por la triangulación en la venta de armas durante el más reciente incidente fronterizo entre Perú y Ecuador involucró a ejércitos y empresas de la Argentina, Venezuela y los Estados Unidos, mientras que en el mercado formal el abasto militar fluía a crédito desde los Estados Unidos, Francia e Israel. América Latina gasta anualmente casi 11 mil millones de dólares para sostener y armar a un millón trescientos mil efectivos, según reportó la OEA para el año 1994, cifra que no es inferior a la media anual gastada durante la década de los ochenta en que florecieron las dictaduras militares. Un reordenamiento de funciones y desplazamientos, a escala continental, de este contingente militar financiado no podía ser despreciado por el nuevo curso de la seguridad interamericana. Al respecto, Joel Johnson, presidente de la Asociación de Industrias Aeroespaciales, se ha quejado amargamente ante los Departamentos de Estado y de Defensa de que la industria de armamentos norteamericana sólo cubra entre el 7 y el 12 por ciento de la demanda en el mercado de armas latinoamericano (Washington, AFP, 18/5/1995).

No resulta novedad afirmar que para muchos ideólogos del neoliberalismo la libertad de mercados y la libertad de iniciativas empresariales traería aparejados tiempos de auténtica y real democracia política en el mundo y en el continente. Algunos, incluso, seducidos por las señas dadas por la política exterior estadounidense, vaticinaban ingenuamente la declinación irreversible de los militarismos y nacionalismos regionales.

¿Podrá acaso el mercado de armas latinoamericano disociarse de las prácticas autoritarias a la alza en sus democracias? Debido a que uno y otra están demasiado anudados en sus procesos de expansión y afirmación, el futuro inmediato sigue favoreciendo al proyecto autoritario. La clase política latinoamericana socava la democracia manteniendo lo que un analista ha denominado un manejo instrumental del poder militar. Sustraer del debate político y de la agenda democrática los temas de la defensa nacional y la seguridad interior, debería realmente preocuparnos (Escobar 1995: 74).

Máscaras e imágenes

Las entidades castrenses colocaron y sostuvieron a pesar suyo en la agenda internacional de los noventa el espinoso tema de la violación de Derechos Humanos. En Chile no ha prosperado la iniciativa cameral del Partido de Renovación Nacional de ampliar el periodo de amnistía a los militares por las faenas sucias cumplidas entre los años 1973-1990, ya que la ley promulgada por Pinochet ampara únicamente el lapso que va de septiembre de 1973 a marzo de 1978. El curso que ha seguido el caso Letelier, y que ha culminado con el proceso y detención del general Contreras, se ha afirmado a costa de saldar simbólicamente los muchos otros juicios que ya no tendrán lugar. En la Argentina, no obstante la sorpresiva aparición de testimonios de militares "arrepentidos" sobre los operativos contrainsurgentes de los ochenta, la administración Menem apuesta a la vigencia de la ley de amnistía y del olvido. La telegráfica autocrítica del general Balza en la Argentina por los costos de la "guerra sucia" no puede ser seriamente considerada como una rectificación, más bien parece editada para limpiar la imagen del ejército a ritmo galopante y que éste pueda asumir sus nuevas funciones policiales. En el Perú, a pesar de que la ley de amnistía militar se promulgó basada en la alta popularidad de Fujimori, la sociedad civil manifestó su inconformidad: le resultaba poco convincente y excesivo apelar a los desvaríos senderistas para legitimar los extravíos castrenses en materia de derechos humanos a lo largo de quince años de guerra interna. Según las encuestas de opinión, la sociedad civil en el Perú ha diferenciado entre su mayoritario respaldo a Fujimori y su rechazo a la ley que ampara en el olvido y la amnistía la impunidad militar. En Honduras, el alto mando militar, acorralado ante las evidencias en su contra, ha sostenido que revisar su cruento pasado extrajudicial manifiesta la vocación masoquista de sus promotores. En Guatemala la controvertida reapertura de la investigación sobre el asesinato de Efraín Bamaca, dirigente guerrillero de la URGU, con posterioridad a su captura por el ejército guatemalteco en marzo de 1992, fue hecha a partir de la denuncia del senador norteamericano Robert Torricelli a principios de 1995. El asunto Bamaca ha abierto fisuras entre la clase política guatemalteca y las propias fuerzas armadas, en una fase decisiva de la pacificación nacional. Un vocero militar guatemalteco familiarizado con la nueva retórica "humanista" acaba de anunciar que la lección de la guerra interna radica en que no debe volver a repetirse.

La obsesión militar de recuperar imagen no se circunscribe a la promulgación de leyes de amnistía, también sigue alimentando fricciones fronterizas y los fantasmas de los golpes de Estado como mecanismos de presión interna a fin de no resentir las medidas propias de adelgazamiento del gasto público, según la moda neoliberal. Tiene razón Leopoldo Zea cuando afirma que:

En el sofisticado y complicado mundo de nuestros días, parecería que los golpes militares podrían ser cosa del pasado. América Latina ha sufrido a lo largo de su historia, una vez alcanzada la emancipación, dicho mal una y otra vez repetido. Olas de golpismo son seguidas, con dificultades, por olas democratizadoras para luego volver, una y otra vez, los golpismos. Nuestras naciones, ahora dentro de la red de complicadas acciones que exige la economía de nuestros días, las soluciones de fuerza, como las castrenses, podrían ser anacrónicas. Pero no ha sido así (Zea 1992: 5).

Zea pasa revista tanto a los conatos militares fallidos en Sudamérica como al golpe militar en Haití, sucedidos entre 1991 y 1992 para concluir con agudeza que “estos sucesos deben ser vistos como una advertencia a los programas neoliberales que, una vez más, como en el pasado siglo XIX, pretenden alcanzar el progreso nacional sacrificando a quienes son considerados más débiles en la lucha darwiniana por la existencia” (Zea 1992: 5). En líneas generales, las reiteradas declaraciones de los altos mandos militares de cada uno de nuestros países sobre su lealtad constitucional y democrática resultan poco convincentes al ver sus más cercanos antecedentes y su creciente presencia en los espacios públicos cumpliendo sus nuevas tareas de profilaxis social, anteriormente encargadas principalmente a las fuerzas policiales. Ese juego de opciones políticas entre el golpe militar y la intervención extranjera para exorcizarlo, según la lección de Haití, revela los signos nefastos que marcan a estas modas autoritarias. La más reciente asonada militar antidemocrática del general Lino Oviedo en el Paraguay reafirma una vez más esta apreciación.

No hay ejército latinoamericano que no haya manifestado a través de sus altos mandos su malestar e inconformidad con el proyecto policial que restringe su papel político y su orgullo institucional. Por otro lado a los militares les inquieta que el Pentágono haya solicitado al Congreso de su país la autorización para entrenar de manera permanente a las policías latinoamericanas. La petición del alto mando militar norteamericano se basa en un pretendido éxito alcanzado con algunas entidades policiales a las que brindó ase-

soría y entrenamiento selectivo en Panamá, Dominicana, Granada, El Salvador, Honduras, Bolivia y Haití (Washington, EFE, 1/3/1994).

Las visitas, giras e intercambios militares están a la alza en la región, presididas por el mayor flujo e interés de los oficiales norteamericanos, sus misiones itinerantes y agencias. La diplomacia militar se inscribe incluso en los circuitos diplomáticos intraamericanos. En esta dirección la atención que las fuerzas armadas vienen prestando a la renovación de funciones de sus agregadurías en organismos internacionales y embajadas en la región resultan preocupantes porque parecen inscribirse en la nueva lógica de reestructuración de espacios políticos y militares y sus redes de interacción.

En América Central el curso desmilitarizador avanza aun cuando los presupuestos militares del área están muy por encima de los asignados a educación y salud, según los informes que circularon en la Conferencia sobre Seguridad y Militarismo convocada por la Fundación Arias para la Paz en Tegucigalpa (Reuter, 25/2/1995). A la disolución definitiva de la Guardia Nacional de Panamá, aprobada por 49 votos contra uno en el Congreso el 23 de agosto de 1994, le sigue un proceso más sinuoso y lento de desmantelamiento militar en Honduras, cuyo primer paso fue la abolición del servicio militar obligatorio, votado por unanimidad en el congreso el 4 de mayo de 1994 y seguido en noviembre del mismo año por una activa campaña popular en la que participó la Iglesia para instar a los 174 mil jóvenes en edad de conscripción militar a que se declararan en rebeldía y se refugiaron en los templos católicos. Los militares hondureños a pesar de estos reveses siguen presionando de muchos y malos modos a su gobierno, frenando su desmantelamiento.

Pero no todas las fuerzas armadas de la región piensan que se les acaba el mundo con la "crisis misional que les toca vivir (Hens/Sanahuja 1995: 54). Las entidades castrenses argentina y brasileña intentan reposicionarse bajo el nuevo esquema mundial. La primera ha venido insistiendo en foros internacionales, como la OEA y la Cumbre Iberoamericana, en favor de la creación de una fuerza interamericana de intervención rápida, la cual ha sido cuestionada por sus pares brasileños y mexicanos. En cuanto a la entidad castrense brasileña, aspira a negociar su ingreso al Consejo Mundial de Seguridad, para afianzar su soñada hegemonía militar en el área. Recuérdese que frente al caso haitiano el Consejo invitó al Brasil en calidad de miembro no permanente. Por su lado, las fuerzas armadas chilenas acentúan su modernización tecnológica, evidencia de ello es la adquisición de un sofisticado modelo de avión radar,

que sus proveedores israelíes aseguran es mejor que los Awacs estadounidenses y que no posee ningún otro país de la región (*La Tercera*, 6/5/1995). Tampoco los militares chilenos descuidan las relaciones con sus pares de la región, multiplicando y renovando sus redes bilaterales, al mismo tiempo que se muestran como interesados anfitriones de eventos especializados.

Una reunión militar celebrada en Santiago de Chile reunió a los directores de las quince academias de guerra de la región, permitiéndoles exhibir e intercambiar nuevas tecnologías educativas e informativas como los nuevos contenidos que demandan los nuevos tiempos. La era internáutica abre la posibilidad para que la educación a distancia le confiera mayor centralidad y proyección a la Escuela de Comando del estado mayor del ejército norteamericano, ahora que la Escuela de las Américas, si bien no cayó en desgracia, ha perdido respaldos en el Congreso norteamericano al recibir, en mayo de 1994, 175 votos en contra de que siga en operaciones. En esta perspectiva no parece casual que el general Randall Kirby, director de la referida Escuela de Comando, elogiase con exceso las bondades de la "educación a distancia" ante sus pares latinoamericanos (*La Jornada*, 21/5/1994 y 22/10/1994). No hay duda que en este y otros ámbitos los Estados Unidos a través de "sus órganos de asistencia militar forman y orientan la oficialidad de las fuerzas armadas como cuerpos auxiliares locales de su esquema de dominación" (Ribeiro 1982: 3).

La doctrina de la seguridad colectiva

EL papel asumido por el Consejo de Seguridad de la ONU en los últimos eventos de intervención militar, incluidos los cumplidos en América Latina, son ilustrativos. William Perry, el jefe del Pentágono, a manera de justificación del nuevo proyecto de cooperación interamericano que presentó a la I Reunión de Ministros de Defensa de las Américas (Virginia, 25 y 26 de julio de 1995), recordó que ya veinte países allí representados venían colaborando con las misiones de paz promovidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo que omitió decir el militar norteamericano, por ya sabido en círculos especializados, es que la Junta Interamericana de Defensa (JID) que preside su paisano el mayor general de la armada James R. Harding, se ha incorporado como órgano consultivo del Consejo de Seguridad de la ONU. Para Perry esta "nueva era de democracia y recursos limitados" resulta propicia para inaugurar una nueva cooperación

militar interamericana, regida por la doctrina de la "seguridad colectiva" y una mayor y más eficiente "interoperabilidad" entre las fuerzas armadas (*La Jornada*, 26/7/1995). El pragmatismo militar norteamericano, propio de estos tiempos de austeridad y de emergencia de nuevos polos de poder mundial, intenta descargar parte significativa de los costos financieros, políticos y sociales de la nueva agenda de seguridad sobre los nada prósperos países de la región. El primer signo de la austeridad financiero-militar estadounidense hacia la región se manifestó en la drástica reducción de su presupuesto de ayuda, que pasó de 1 510 a 760 millones de dólares, entre 1992 y 1994 (Miami, AFP, 13/7/1993).

No existe duda alguna que la novísima doctrina de la seguridad colectiva obliga a una revisión de fondo de las ideologías nacionalistas y por ende del concepto de soberanía nacional. La meta del Pentágono de dar por concluidos los diferendos fronterizos y territoriales, con base en acuerdos entre los países latinoamericanos, no podrá cumplirse a los ritmos deseados, por razones muy diversas en las que las tradiciones nacionalistas sólo constituyen una de sus variables. Otra característica notable de este proyecto interamericano, y que lo diferencia operativamente de los trazados por el organismo competente de la ONU, gira en torno al carácter preventivo de su agenda y sus múltiples tareas "pacificadoras". A pesar del éxito de la convocatoria y sus acuerdos iniciales, fueron visibles las actitudes de disidencia y reserva de países como Brasil, Nicaragua y México, frente a la entusiasta y desmedida participación argentina deseosa de asumir un papel protagónico. El pase a retiro, más que la destitución promovida por algunos gobiernos latinoamericanos, ha permitido ir relevando a los oficiales tan leales a nacionalismos demasiado anacrónicos para el gusto de los gobiernos neoliberales como incómodos para la doctrina de la seguridad colectiva que auspicia la Junta Interamericana de Defensa. Los casos más documentados de purgas y relevos militares se han cumplido bajo los gobiernos de Carlos Menem en Argentina, Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia, Alberto Fujimori en Perú, Rafael Caldera en Venezuela y Ramiro de León Carpio en Guatemala. Estas reorientaciones y reajustes en las fuerzas armadas llevaron al coronel Mohamed Alí Seineldín, un veterano de las disidencias militares en la Argentina, a sostener hace algunos años que estaba gestándose ya una Internacional Carapintada.

La propuesta del Pentágono no sorprendió a los altos mandos militares latinoamericanos, ya que varias de sus aristas y alcances se

habían filtrado tanto en reuniones bilaterales como multilaterales promovidas por el TIAR e incluso por la OEA. Además no podía olvidarse la añeja iniciativa de Dean Rusk en la Conferencia de Punta del Este sobre la necesidad de constituir una fuerza de paz para el continente, independientemente de las tres décadas de por medio y el nuevo contexto mundial. Tampoco escapa a los analistas políticos de la región que la designación y labor del embajador norteamericano ante la OEA, Luigi Einaudi, prestigiado conocedor de los ejércitos latinoamericanos desde los años sesenta, hacía correr mucha agua bajo el molino; parecieron refrendar esta apreciación las inoportunas declaraciones injerencistas de Einaudi en 1992, que despertaron voces de protesta en Venezuela. Dos años más tarde, el embajador argentino Hernán Patiño, presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, convocó a una reunión preparatoria de expertos militares a celebrarse en Buenos Aires del 14 al 18 de marzo de 1994, a fin de discutir las nuevas líneas de cooperación e integración militar (Washington, IPS, 4/3/1994). En este evento, como en la XXI Conferencia de Ejércitos Americanos celebrada en Honduras (noviembre de 1994), se afinaron los nuevos criterios y la agenda de prioridades que emerge de la problemática continental.

Nuevamente la diplomacia argentina apostó a favor de la iniciativa norteamericana. Estimaba, no si razón, una cierta audiencia en los países miembros de la OEA, ni qué decir de los adherentes al TIAR. Pareciera que la postura argentina, no obstante el revés sufrido durante la guerra de las Malvinas, al errar en su cálculo estratégico sobre el posicionamiento estadounidense, intentase configurar una nueva modalidad de cooperación con la potencia del norte. Ésta le garantizaría, según la lógica de la diplomacia argentina, ciertas seguridades en el curso futuro de sus negociaciones, diferendos y competencias con Brasil, Chile y la propia Inglaterra. La frágil aunque interesada apuesta diplomática de la administración Menem le ha restado credibilidad y ascendencia sobre los países de la región. La respuesta norteamericana frente a las pretensiones argentinas no ha resultado muy favorable que digamos a la luz de los acontecimientos de los noventa.

A raíz de la Guerra del Golfo se hizo explícito por la vía del hecho la revisión inducida por las potencias del Norte sobre la soberanía nacional como noción rectora del derecho internacional, así como los diseños más plurales para financiar y legitimar tales operativos militares. Considerando lo anterior, ya no resulta casual que comiencen a desarrollarse marcos justificativos en favor

del principio de intervención (Pastor 1993; Portilla 1996: 4A), la más reciente elaboración corresponde al Vaticano que ha legitimado el denominado principio de "injerencia pacífica o humanitaria".

En los países latinoamericanos, el papel asumido por el Comando Sur, uno de los seis comandos unificados que el Pentágono proyectó a escala mundial para orientar el curso de la guerra fría, viene siendo objeto de revisión; ya no se necesita, como antaño, de fuerzas permanentes de avanzada, fuera de que sus costos financieros reales son vistos como excesivos. El desmantelamiento de la mayoría de las bases militares en Filipinas y Panamá responde a esta nueva lógica estratégica y financiera del Pentágono. En Panamá 11 de las 14 bases norteamericanas serán devueltas conforme al Tratado Torrijos-Carter el año 2 000, probablemente las bases Howard, Rodman y Sherman, por la significativa concentración de recursos de la más alta tecnología militar, sean renegociadas: la base aérea Howard es la segunda en importancia estratégica norteamericana de cara al dominio del Pacífico, la base naval Rodman opera como comando especial antinarcóticos, mientras la base Sherman sirve de espacio de entrenamiento en zona tropical de cara al control de la región amazónica. A partir de febrero de 1994 la responsabilidad de adecuar al Comando Sur a sus nuevas funciones y tareas recayó en manos del experimentado general Barry McCaffrey, veterano de la guerra de Vietnam y del Golfo Pérsico y ex director de Política y Planes Estratégicos del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas estadounidenses. Cumplida ya su misión, el general Barry McCaffrey ha sido relevado en el mando por el general Wesley K. Klarck al que le corresponderá afinar una agenda más operativa.

Un reciente documento sobre estrategia interamericana del Comando Sur explica el viraje de uno de sus principales *modus operandi*: "Durante el año pasado, los ejercicios de Southcom se han convertido de eventos bilaterales que destacaban escenarios de combate convencional, en ejercicios multilaterales enfocados en el mantenimiento de paz, asistencia humanitaria, operaciones contra el narcotráfico y otras misiones más apropiadas de la posguerra fría" (*La Jornada*, 16/7/1995). La agenda de maniobras cumplidas fue la siguiente: Ecuador, Venezuela y Colombia (septiembre de 1994), Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay (agosto de 1995). En fecha muy reciente, la visita a México de Perry motivó un cierto debate político nacional al declarar acerca de la viabilidad de maniobras militares conjuntas entre los dos países.

La presencia de la DEA en nuestros países venía ya prefigurando esta tendencia que acompaña al nuevo orden mundial de vigilar, intervenir y atacar determinados blancos, sin posicionar físicamente su volumen y potencial de fuerza. Para el alto mando militar brasileño los radares emplazados por la DEA en países amazónicos como Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela y Guyana no pueden disociarse del proyecto del Pentágono de construir un aeropuerto en el Paraguay para el aterrizaje de pesados cazabombarderos y aviones de carga militar, cerrando un cinturón estratégico sobre la Amazonia que vulnera la soberanía brasileña (*La Jornada*, 14/8/1994). Durante la intervención en Panamá la Brigada 193 acantonada en la zona del Canal sólo cooperó con tres mil efectivos al contingente mayor de 27 mil soldados procedentes en un 89 por ciento de las "Fuerzas de Desplazamiento Rápido" (Zárate 1994: A2).

La agenda militar que corresponde al actual proceso de mundialización y globalización que nos toca vivir pone el acento en los problemas de la posguerra fría o paz caliente: los conflictivos flujos de migrantes económicos y políticos que van de Sur a Norte, la emergencia de fundamentalismos políticos y religiosos, el narcotráfico, el terrorismo y la aparición y expansión de nuevas pandemias. Esta misma agenda ha sido traducida al espacio continental por las instituciones militares: los flujos de migrantes aparecen tensando fuertemente las fronteras intramericanas, siendo el caso más visible el de la frontera entre México y los Estados Unidos, en actual proceso de militarización, mientras la clase política renueva sus fobias racistas a través de leyes antiinmigrantes y procesos judiciales espurios. La infamante Cortina de Acero de los noventa sustituye simbólicamente a la ya desmantelada Cortina de Hierro. La primera cortina representa actualmente el nivel de exclusión con el que se quieren marcar las relaciones Norte-Sur, mientras que la segunda revelaba la polaridad Este-Oeste, capitalismo *versus* comunismo, que reinó a lo largo de cuatros décadas.

El flujo de migrantes tiene muchas más líneas de conflicto intramericano que las ya anotadas en la medida en que no existe país que no tenga por tal motivo fricciones con sus vecinos. Las diferencias entre Argentina y Bolivia, Venezuela y Colombia, México y Guatemala, Perú y Ecuador, Dominicana y Haití no están exentos de esta trama que se irá acentuando en los próximos años. A la liberalización irrestricta del capital a escala planetaria le corresponde inevitablemente una alta y errática movilidad de la mano de obra que viene desdibujando fronteras nacionales y espacios etno-

culturales. El asunto de los "balseros" en el Atlántico-Caribe ya rebasó en una oportunidad la capacidad instalada de las bases norteamericanas en Cuba y Panamá, propiciando el surgimiento de controvertidos campos de concentración, análogos a los instalados por la *migra* en la frontera estadounidense-mexicana. La cara no visible de la moneda de esta migración de Sur a Norte también se viene expresando por el lado de ese nacimiento Mediterráneo que es el océano Pacífico. Un buen número de países de la región viene recibiendo en forma gradual a migrantes asiáticos, principalmente chinos y coreanos. Países como Argentina y Perú, bajo la lógica de los nuevos tiempos, han colocado el otorgamiento de sus respectivas nacionalidades en calidad de mercancías deseables en los mercados asiáticos a tasas que oscilan entre los 15 y los 20 mil dólares. La configuración de nuevas identidades está en curso y las fuerzas armadas ancladas en los resabios de viejos y gastados nacionalismos no terminan de readecuarse a la lógica de los nuevos tiempos. Quizás por ello, las tareas policiales que les vienen siendo asignadas son asumidas con cumplido pragmatismo a manera de zurcir su campo de legitimación institucional.

La pretendida guerra contra el narcotráfico, en la que los Estados Unidos y los gobiernos neoliberales han comprometido a las fuerzas armadas de América Latina, ha resultado una auténtica trampa. Algunos sectores corruptos ven en la lucha contra el narcotráfico una jugosa empresa en expansión que alimenta una mercantilizada rotación de mandos como en Colombia, Bolivia, México y hasta 1995 en el Perú. Fujimori reasignó a las fuerzas policiales cubrir centralmente el frente antinarcóticos, otrora disputado por las fuerzas armadas, dadas las jugosas entradas que dejaba la región del Huallaga. Un oficial de mando podía recibir unos diez mil dólares por autorización de vuelo a una narcoavioneta, fuera de otras tasas de transporte terrestre sobre insumos químicos o naturales para la fabricación de la pasta básica de cocaína o la goma de opio. El Operativo Río, que llevaron a cabo las fuerzas armadas brasileñas con lujo de violencia sobre las favelas, del 11 de noviembre de 1994 al 3 de marzo de 1995, dejó un saldo ridículo de incautaciones: 7 kilos de cocaína de mala calidad y 73 kilos de marihuana. Obviamente no cayó ninguno de los *capos* de las mafias cariocas, pero sí se registraron un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos (*La Jornada*, 26 de marzo de 1995). A pesar de este fracaso evidente y de los ya cosechados por los militares andinos, el general estadounidense John Sheenan instó a reforzar la campaña militar contra el narcotráfico en el marco de la Conferencia de Seguridad del Caribe que

reúne a casi una veintena de jefes militares de los países del área (*La Jornada*, 24 de marzo de 1995).

Los conflictos de baja intensidad en América Latina, según el mirador militar de los noventa, distan de cerrarse en los temas del narcotráfico, el terrorismo y ciertos rezagos y brotes tardíos de radicales insurgencias armadas, en la medida en que van ganando peso decisivo las denominadas 'fuentes económico-sociales de la inestabilidad política'. Esta hipótesis había cobrado precoz visibilidad y consenso en la reunión de los jefes militares del Mercosur realizada en Buenos Aires a mediados de 1993, a la que asistieron también los jefes militares de Chile y Bolivia. En tal evento castrense se acordó que el curso nuevo de la guerra iba dirigido "contra la pobreza y todo lo que amenace la estabilidad socioeconómica" (*La Jornada*, 18 de junio de 1993).

Dados tales antecedentes, no resulta novedad que el discurso y el proyecto de seguridad colectiva diseñado por el Pentágono para el continente esté referido principalmente a prevenir y enfrentar potenciales estallidos sociales de mayor fuerza e intensidad que los acaecidos en las décadas precedentes. Resulta obvia la preocupación de las clases políticas de la región por el tenor crónico de la explosividad social de las ciudades y el curso sostenido y violento de las rebeliones étnicas. La no gobernabilidad está marcada por la miseria creciente y el descontento social sostenido y violento, en estas precarias y cada día más autoritarias democracias neoliberales. Los dispositivos jurídicos se proyectan amenazantes cuando consideran incluir leyes antivagancia y la reducción de la edad para la aplicación de los códigos penales. El montaje fallido de una supersecretaría de seguridad, propuesta a principios de 1994 por el ministro de Economía Domingo Cavallo bajo la administración Menem, intentaba prevenir y frenar respuestas sociales desbordantes como las acaecidas en Jujuy y Santiago del Estero. Los nuevos desbordes populares en Salta y La Rioja, y otros más que se avecinan, reactivarán a lo mejor una propuesta de seguridad más matizada en sus esquemas organizativos pero igualmente dura en sus alcances represivos.

En el curso de 1994 siete discretos contingentes de ingeniería, comunicaciones e inteligencia militar, que fluctúan entre 100 y 500 efectivos, fueron enviados por el Comando Sur a igual número de países latinoamericanos a cumplir tareas de acción cívica, la mayoría denominada eufemísticamente "Fuertes caminos" y adjetivada según el país y el año de operación. De dichas acciones se tienen

reportadas cinco, en zonas de conflicto o colindantes, a saber: en la zona de Misiones en la Argentina; en las localidades rurales de San José, Salto y Tacuarembó en el Uruguay; en el valle del Cauca en Colombia bajo el operativo denominado "Fuentes caminos Colombia 1994"; en la Baja Verapaz en Guatemala, zona fronteriza con México y en la zona de Luque en el Paraguay (*La Jornada*, 12 de febrero de 1994). La oferta de ampliar la presencia militar norteamericana con otro contingente en el departamento de San Pedro en el Paraguay, zona conflictuada por la emergencia de radicales movimientos campesinos que pasaron a la toma de tierras, motivó el reclamo del ejército brasileño a su par paraguayo, obligándolo a tomar distancia frente a la iniciativa estadounidense. A ningún atento observador de la problemática actual de la región escapará el hecho de que estos lugares seleccionados por el Comando Sur se ubican en zonas críticas signadas más por la emergencia de estallidos sociales que por su especial gravitación geopolítica. A pesar de la aparente misión humanitaria y civilizadora de los destacamentos militares norteamericanos, siguen presentándose en el continente reacciones adversas de la sociedad civil más que las procedentes de los partidos políticos. En 1992 los pobladores de la localidad amazónica de Santa Ana en Bolivia manifestaron su repudio ante la presencia de tropas norteamericanas; más fuertes fueron las reacciones de los pobladores colombianos en 1994, que motivaron la salida de los contingentes norteamericanos de las localidades amazónico-fluviales pertenecientes a las provincias de Meta y Putumayo, como de la base naval de Málaga en el Pacífico colombiano, cerca de Cali.

Mirado desde el interior de las fuerzas armadas el futuro de la región resulta una especie de territorio minado: la soberanía nacional queda cada día más deslegitimada en los marcos de los organismos internacionales, la nacionalidad, objeto sacro de sus cultos patrióticos, convertida en mercancía, las fronteras desdibujadas por los nuevos tratados y procesos de integración pero también por las demandas de autonomía regional de los pueblos indios, el saludo a la bandera y el canto del himno nacional cuestionado por minorías religiosas en aras de sus derechos civiles, el otrora inobjetable servicio militar comienza a ser revertido como en el caso de Honduras, y hasta aparecen movimientos civiles y publicaciones que abogan por la abolición del servicio militar en Colombia y la Argentina, en Panamá y Haití las fuerzas armadas son deslegitimadas y reorganizadas, si no disueltas por decisión extranacional. Por último, sectores críticos de la oficialidad militar intentan renovar sus nacionalismos dentro y fuera de los marcos castrenses, como son los casos del

Movimiento Bolivariano Revolucionario de Venezuela y del Movimiento Revolucionario General José Trinidad Cabañas de Honduras. Frente a tal situación las tendencias castrenses se proyectan endureciendo sus anquilosados fueros desde posiciones de fuerza y caducos paradigmas nacionalistas, intentando modernizarse y re-negociar su función en el nuevo orden en construcción o se someten pragmáticamente a las nuevas tareas y recortes presupuestales.

La nueva misión asignada a las fuerzas armadas de controlar de manera directa el orden público urbano y rural, reforzando a las corruptas e ineficientes fuerzas policiales, en el fondo revelan la tendencia autoritaria que acompaña a las pretendidas democracias de la región así como los costos sociales del proyecto neoliberal. Las fuerzas armadas enfrentarán del peor modo las estrategias de supervivencia de millones de personas arrojadas a la miseria y la economía informal, pero también a la violencia delictiva, social y política. A fines de marzo de 1995 un cronista de Reuter reseñaba la presencia de los militares en diversas ciudades latinoamericanas a fin de cumplir tareas de corte policial. La nueva divisa militar consistió en conjurar las protestas de sindicalistas y descontentos sociales con las políticas de ajuste, así como en frenar la escalada delictiva urbana en Santo Domingo, La Paz, Tegucigalpa, San Salvador, siguiendo las huellas de los militares brasileños estrenadas el año anterior (Miami, Reuter, 22/3/1995).

Algunos analistas barajan la hipótesis de que las tensiones internas en los ejércitos sobre el curso y costo político de sus acciones podría suscitar interesantes disensos y rectificaciones, al punto de doblarles las manecitas a los tecnócratas de turno. Lo cierto es que las disidencias militares neopopulistas fracasaron, forzando a la baja, al retiro o al exilio a sus más destacados líderes. Por otro lado, poner excesivas esperanzas en estos sectores no es deseable si miramos nuestra urgente necesidad de renovar horizontalmente la cultura política de nuestros pueblos. Poco importa que por el momento no se vislumbre en el horizonte ningún signo que augure la revocación del proyecto depredador de los neoliberales, ahora escudado en el despliegue público de nuestras fuerzas armadas y en la coartada totalitaria de que ellos poseen la única patente sobre la democracia. Frente al neoliberalismo, hagamos de Nuestra América un proyecto de futuro deseable, compartamos la esperanza y el entusiasmo de Ribeiro de que el tercer milenio no nos será ajeno. Quizás inventemos una democracia posible sin asimetrías sociales, sin fronteras, sin militares. Soñemos también con Ribeiro que los traumatizados Pueblos-Testimonio devendrán en Pueblos Emergentes.

BIBLIOGRAFÍA

- Escobar S., Santiago, 1995. "La política de defensa como política de Estado", *Nueva Sociedad*, núm. 138, pp. 70-79.
- Hens, Marián y José Antonio Sanahuja, 1995. "Seguridad, conflictos y reconversión militar en América Latina", *Nueva Sociedad*, núm. 138, pp. 48-69
- Melgar, Ricardo y Mercedes Olivera, 1981. "Seguridad Nacional y población indígena en América Latina", *Cuicuilco* (México), año II, núm. 5, pp. 31-42.
- Morla Concha, Manuel, 1993. *La función social del ejército*, Lima.
- Ribeiro, Darcy, 1977. *Las Américas y la Civilización*, México, Editorial Extemporáneos (Colección *Latinoamérica*, núm. 2).
- , 1982. *El dilema de América Latina. Estructuras de poder y fuerzas insurgentes*, México, Siglo XXI.
- , 1991. "Los indios y el Estado Nacional", *El Gallo Ilustrado* (México), suplemento dominical de *El Día* (11 de agosto), pp. 2-6.
- , 1993. "O Brasil é fundador da Utopia" entrevista concedida a Ivana Bentes, *Cartas. Falas, reflexões, memórias; informe de distribuição restrita do senador Darcy Ribeiro*, vol. 3, núm. 8, pp. 187-195.
- Rivas Sánchez, Fernando y Elizabeth Reimann Weigert, 1976. *Las Fuerzas Armadas de Chile: un caso de penetración imperialista*, México, Ediciones 75.
- Rospigliosi, Fernando, 1994. "El rol de los militares en la sociedad" *Caretas* (Perú), núm. 1300 (24 de febrero), pp. 34-40 y 88.
- Vásquez, Ramiro, 1991. "Relaciones peligrosas: EU y los militares latinoamericanos", *La Jornada* (México), suplemento 70. Aniversario (28 de septiembre), pp. ii-iv.
- Viñas, David, 1982. *Indios, ejército y frontera*, México, Siglo XXI.
- Zárate, Manuel F., 1994. "La 'Brigada 193' al igual que el Comando Sur no tienen ya vigencia", *La Estrella de Panamá* (Panamá), año CXLI (6 de agosto), p. A2.
- Zea, Leopoldo, 1992. "Golpismo en Venezuela", *El Día Latinoamericano* (México), año 2, núm. 77 (24 de febrero), p. 5.

HEMEROGRAFÍA

- La Jornada* (México), 1993-1996.
- La Tercera* (Chile) 1995.
- Cables: AFP, EFE, IPS, Reuter (1993-1995).